RECOMENDACIÓN 39/2008

Saltillo, Coahuila a 18 de noviembre de 2008.

LIC. [REDACTED]
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA
EN EL ESTADO DE COAHUILA.
P R E S E N T E . -

En los autos del expediente [REDACTED] se pronunció una resolución que copiada a la letra dice:

"Saltillo, Coahuila; dieciocho (18) de noviembre de dos mil ocho (2008). -----

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, con fundamento en los artículos 195 de la Constitución Política Local, y 1, 2 fracción XI, 3, 20, fracciones II, III, IV y XI de su Ley Orgánica, después de haber examinado las constancias que integran el expediente [REDACTED], iniciado con motivo de la queja interpuesta ante este Organismo por la señora [REDACTED], quien reclama actos atribuidos a Agentes del Ministerio Público del Séptimo Grupo de Investigación de Delitos contra la Familia, Menores y Discapacitados, Mesa I, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, consistentes en **violación al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, en su modalidad de irregular integración en la averiguación previa penal y dilación en la procuración de justicia;** y en virtud de que esta Comisión se estima competente para conocer de la referida queja, procede a dictar la presente resolución; y,

RESULTANDO:

PRIMERO: Que el día 22 de abril del 2008, compareció ante este Organismo la señora [REDACTED], con el objeto de presentar una queja por hechos que consideró violatorios a sus derechos humanos, que atribuyó a los Agentes del Ministerio Público del Séptimo Grupo de Investigación de Delitos contra la Familia, Menores y

Discapacitados, Mesa II, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien manifestó al respecto: "Mi hija la tenía en la guardería [REDACTED] del Seguro Social, y el día 1° de octubre del año próximo pasado, al ir a recogerla mi hermana [REDACTED], se encontro con la novedad que mi hija traia los ojos llorosos y estaba triste y ademas se quejaba de dolores en su pipi, al llegar a la casa mi mamá le revisa y se dio cuenta de que la niña estaba sangrando, posteriormente me hicieron del conocimiento de los ellos (sic) por vía telefónica, pues yo me encontraba en el trabajo, relatandome los hechos, inmediatamente acudi a mi domicilio, la lleve a la Cruz Roja, ahí me dijeron que si tenía seguro social, la llevara ahí, pero que antes fuera a la guardería para saber lo que había pasado con mi hija, en la guardería les relate los hechos y me comunicaron que fuera al siguiente día, en seguida me dirigí a la clinica 2 del seguro social y me trasladaron a la clínica 1 en urgencias, ahí me comentaron que la niña no había sido violada, pero si había recibido tocamientos, enseguida acudí a la Procuraduría a interponer mi denuncia, atendiendome la Lic. [REDACTED], afortunadamente se encontraba el medico legista, el me dio un diagnostico y que traía una ruptura que probablemente fue con la uña, y es fecha que mi denuncia no ha caminado pues no han citado a las personas, deseo manifestar que mi hija me dice que quien le hizo eso fue la muchacha que trabaja en la guardería de nombre [REDACTED] I. [REDACTED] [REDACTED].."

SEGUNDO: Una vez que se admitió la queja de mérito, se requirió a la autoridad señalada como responsable rindiera su informe, mismo que presentó mediante el oficio SDH -385/2008, con fecha 27 de junio del 2008, la licenciada [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], Subdirectora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, al que, a su vez, se agregó copia certificada de la Averiguación Previa, que le fue remitido mediante oficio DS/1063/08, firmado por la licenciada [REDACTED] [REDACTED], en su carácter de Delegada de la Procuraduría General de Justicia del Estado en la Región Sureste, del cual se desprenden las siguientes diligencias:

1. Denuncia por comparecencia de la C. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], en representación de su menor hija, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], con fecha 2 de octubre del 2007.
2. Escrito en el que se remite denuncia número [REDACTED], con fecha 2 de octubre de 2007, suscrito por la licenciada [REDACTED] [REDACTED]

- [REDACTED], Agente del Ministerio Público del Séptimo Grupo de Delitos contra la Familia, Menores y Discapacitados, Mesa I, en el que turna el asunto a la licenciada [REDACTED], Agente Investigador del Ministerio Público del mismo grupo, Mesa II, para que proceda a la Investigación de los hechos.
3. Acuerdo de recepción de denuncia con fecha 3 de octubre de 2007 suscrito por la licenciada [REDACTED] Agente Investigador del Ministerio Público del Séptimo Grupo de Investigación de Delitos contra la Familia, Menores y Discapacitados, Mesa II.
 4. Acuerdo de inicio de Investigación dictado con fecha 2 de octubre del 2007, firmado por la licenciada [REDACTED], Agente Investigador del Ministerio Público del Séptimo Grupo de Investigación de Delitos contra la Familia, Menores y Discapacitados, Mesa I, iniciado con motivo del delito cometido en perjuicio de la menor [REDACTED]
 5. Acuerdo de fecha 2 de octubre del 2007, pronunciado por la licenciada [REDACTED], Agente Investigador del Ministerio Público del Séptimo Grupo de Investigación de Delitos contra la Familia, Menores y Discapacitados, Mesa I, en la que designa perito.
 6. Resolución dictada el 2 de octubre del 2007, mediante la que designa como perito al doctor [REDACTED] a efecto de que practique examen ginecológico con el objeto de determinar el tipo de lesiones que presenta la menor [REDACTED]
 7. Diligencia relativa a la aceptación y protesta del cargo de perito, de fecha 2 de octubre del 2007, ante la licenciada [REDACTED] Agente Investigador del Ministerio Público del Séptimo Grupo de Investigación de Delitos contra la Familia, Menores y Discapacitados, Mesa I.
 8. Orden de Investigación dirigida al doctor [REDACTED] de fecha 2 de octubre de 2007, girada por la licenciada [REDACTED], Agente Investigador del Ministerio Público del Séptimo Grupo de Investigación de Delitos contra la Familia, Menores y Discapacitados, Mesa I.
 9. Dictamen ginecológico con fecha 1 de octubre de 2007, suscrito por el docto [REDACTED]

10. Declaración testimonial de la menor [REDACTED] ante la presencia de la licenciada [REDACTED], Agente Investigador del Ministerio Público del Séptimo Grupo de Investigación de Delitos contra la Familia, Menores y Discapacitados, Mesa II, rendida con fecha 4 de octubre de 2007.
11. Certificación de documentos de [REDACTED], asentada con fecha 26 de junio de 2008.

TERCERO: Del informe rendido por la autoridad, se dio vista al representante de la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera, lo que hizo oportunamente el 10 de julio de 2008, quien expresó lo siguiente: "De la vista al informe me doy cuenta que es evidente que existe dilación dentro de la averiguación [REDACTED], se observa que la ultima diligencia se realizo en fecha cuatro de octubre del dos mil siete que fue la declaración de mi hija [REDACTED] posteriormente me dijeron que citarían a los inculpados pero cuando entro a cargo del expediente la licenciada [REDACTED] el expediente se quedo rezagado y aproximadamente hace un mes fui a la PGJE para ver el avance de la averiguación y una licenciada de la cual no se su nombre me dijo que ya no va hacer nada porque yo no he ido, pero como señalo al principio de esta diligencia con ver la fecha de la ultima diligencia se observa que hay dilación en la averiguación".

CUARTO: Ahora bien, durante el procedimiento, este Organismo recabó diferentes elementos de prueba, tales como documentos de la averiguación previa penal [REDACTED], con el objeto de poder determinar sobre la verdad de los actos reclamados y si los mismos constituyen o no violación de los derechos humanos; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila es el Organismo constitucional encargado de tutelar que sean reales y efectivos los derechos fundamentales de toda persona que se encuentre en territorio coahuilense, por lo que, en cumplimiento a tal encomienda, solicita tanto a las autoridades como a servidores públicos, con absoluto respeto a la autonomía de la que están investidos, den cabal cumplimiento a las disposiciones legales.

SEGUNDO.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20, fracciones I, II y IV, y 129 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, esta institución resulta competente para conocer y resolver la presente queja, en virtud de que los hechos reclamados se atribuyeron a servidores públicos del gobierno del Estado de Coahuila, siendo éstos, servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, con residencia en esta ciudad y de que los mismos son considerados actos de autoridad.

TERCERO.- Que esta Comisión, de conformidad con el artículo 130 de su Ley Orgánica, es competente sólo para dar seguimiento a la Recomendación que se emite y, en su caso, verificar su cumplimiento, por lo que, con la facultad que me otorga el artículo 37, fracción V, de la invocada Ley y, con fundamento en los artículos 112 y 125 del citado ordenamiento, he resuelto dictar, en mi carácter de Presidente del Organismo, la presente resolución en la que se emite una Recomendación, por considerarse que los hechos sí son violatorios de los derechos humanos de los agraviados.

I. HECHOS FUNDATORIOS DE LA QUEJA.

Los constituyen los que narró en su queja la señora [REDACTED] [REDACTED] de tal manera que el tema a decidir en esta resolución debe limitarse a determinar si aquéllos vulneran o no los derechos de las agraviadas.

II. EVIDENCIAS QUE OBRAN EN AUTOS, DE LAS CUALES SE PUEDE INFERIR LA DEMOSTRACIÓN DE QUE LA DILACIÓN EN QUE INCURRIÓ LA AUTORIDAD EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA, CONSTITUYE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS.

Las evidencias presentadas y las obtenidas por esta Comisión, así como aquéllas remitidas por la autoridad a quien se imputan las violaciones, son las siguientes:

1. Queja interpuesta por la señora: [REDACTED] en representación de su menor hija, [REDACTED] ante personal de la Primera Visitaduría Regional de la Comisión de

Derechos Humanos del Estado de Coahuila con residencia en esta ciudad de Saltillo, Coahuila.

2. Informe que rindió la autoridad responsable e los términos descritos en el resultando segundo de la presente recomendación.
3. Copia certificada de las diligencias de la averiguación previa número [REDACTED], integrada por la licenciada [REDACTED]

III. SITUACIÓN JURÍDICA GENERADA POR LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y DEL CONTEXTO EN VIOLACIÓN QUE SE PRESENTARON.

Una de las premisas que conviene dejar establecidas consistentes en que no existe controversia alguna en cuanto a la presentación de la denuncia por los delitos que ya quedaron precisados, ni en cuanto a la integración de la averiguación previa en la agencia del Séptimo Grupo de Investigación de Delitos contra la Familia, Menores y Discapacitados, por lo que resulta procedente entrar al estudio de las constancias de autos para determinar si se actualizaron o no las irregularidades de que se dolió la representante de la quejosa y que, en última instancia, constituyeron una violación a sus derechos por dilación injustificada en la procuración de justicia.

El artículo 17 de la Constitución General de la República, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos previstos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sin embargo, cabe destacar que el artículo 21 de la Ley Suprema prevé, una actividad estatal previa a la impartición de justicia penal, que la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará de una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato; por su parte, el artículo 102 del mismo ordenamiento establece, en lo conducente, que incumbe al Ministerio Público de la Federación, la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los

inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; disposición esta última que guarda relación directa con lo dispuesto por el artículo 108 de nuestra Constitución local, al tenor del cual, compete al Ministerio Público, como representante de la sociedad, a través de sus agentes, la investigación y persecución de los delitos del orden común ante los tribunales.

De lo anterior se deriva que, para que una persona ocurra ante los tribunales a solicitar se le imparta justicia en un asunto del orden criminal, es requisito indispensable que estimule la actividad del Ministerio Público, quien es el único que puede investigar los delitos, así como su persecución, ante los Juzgados Penales competentes, y, en virtud de que tiene dicha potestad en forma exclusiva, es evidente la importancia que reviste su función para garantizar la seguridad jurídica de quienes ocurren ante dicha institución y, precisamente, esa función debe de estar apegada a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, a los que se refiere el artículo 109 de nuestra Carta Magna, y los cuales son ratificados por la local en su artículo 160. Aunado a lo anterior, se debe considerar a la Averiguación Previa como una serie ordenada de diligencias practicadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional.

Así las cosas, este Organismo considera que existió dilación en la procuración de justicia, en lo que se refiere a la integración de la averiguación previa penal número [REDACTED] radicada en la Agencia Investigadora del Ministerio Público del Séptimo Grupo de Delitos Contra la Familia, Menores y Discapacitados Mesa 1, la cual dio inicio con motivo de la denuncia presentada por la señora [REDACTED] [REDACTED] dilación que se produjo en virtud de que no se justifica legalmente el retraso de que fue objeto la integración de dicha indagatoria, contraviniendo las disposiciones legales antes referidas, ante lo cual que no se ha ejercitado la acción penal correspondiente ante el juez penal competente.

IV. OBSERVACIONES, ADMINICULACIÓN DE PRUEBAS Y RAZONAMIENTOS LÓGICO-JURÍDICOS Y DE EQUIDAD EN LOS QUE SE SOPORTA LA CONVICCION SOBRE LA VIOLACION AL DERECHO A LA LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA EN SU MODALIDAD DE DILACION DE LA PROCURACION DE JUSTICIA.

En efecto, la señora [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] adujo que, con fecha 2 de octubre del 2007, presentó denuncia penal, por comparecencia, en la Procuraduría General de Justicia del Estado, por los delitos de atentados al pudor impropio y demás que resultaren, cometidos en perjuicio de su hija, [REDACTED] [REDACTED], denuncia que fue turnada para su debida integración al Séptimo Grupo de Investigación de Delitos contra la Familia, Menores y Discapacitados y quedó radicada bajo el número de expediente [REDACTED] pero a más de un año de la fecha en que compareció la agraviada a denunciar los hechos, no se ha consignado el expediente ante el juez penal correspondiente, por lo que la quejosa consideró que existe una dilación excesiva en la procuración de justicia por parte de la licenciada [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Agente Investigador del Ministerio Público del Séptimo Grupo de Investigación de Delitos contra la Familia, Menores y Discapacitados, Mesa I.

Es importante dejar plenamente establecido en esta resolución que, formando parte de los autos, obra copia simple de la averiguación previa [REDACTED], que fue remitida por la licenciada [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Subdirectora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y que, por lo tanto, prueba fehacientemente en contra de la autoridad responsable.

Del análisis de la copia de dicha averiguación, que se envió a este Organismo mediante oficio SDH-385/2008, se aprecia una evidente dilación en la procuración de justicia, pues solamente se practican diligencias los días dos, tres y cuatro de octubre del año próximo anterior, y que fue el día en que compareció la quejosa a denunciar el presunto delito y se volvió a actuar hasta el día 4 de octubre de 2007 cuando rindió su testimonio la menor afectada [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]. Por otro lado, consta dentro de a indagatoria que se giró una orden de investigación al Jefe de

Grupo de la Policía Ministerial para que investigara si hubo testigos presenciales de los hechos y, en su caso, informara sus nombres y domicilios donde se les podían localizar, realizara lo conducente con el fin de impedir que se dificultara la investigación, investigara lo referente al probable responsable(s); sin embargo, en las actuaciones no existe ninguna constancia que acredite el cumplimiento de la orden de investigación y tampoco que se haya citado a la probable responsable para recabar su declaración en calidad de inculpada, amén de que el doctor [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], perito médico designado por la autoridad investigadora, concluyó que en la vagina de la menor afectada sí encontró presencia de lesión en el labio mayor derecho, con sangrado reciente por estigma ungueal, pues al existir indicios de lesión y comprobados por el médico perito forense, es obvio que la situación requería ser investigada, pese a lo cual, persistió la pasividad de la licenciada [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], Agente Investigador del Ministerio Público del Séptimo Grupo de Investigación de Delitos contra la Familia, Menores y Discapacitados, Mesa I, para continuar con la investigación.

Por otro lado, se observa que después de ocho meses de que no se realizó diligencia alguna dentro de la averiguación previa en referencia, la señora [REDACTED] [REDACTED] en representación de su menor hija, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] **presentó queja ante este Organismo**, lo cual se acredita dentro de autos.

Por lo anterior y con el fin de reforzar la evidente violación al acceso a la justicia, mediante oficio PV-2257-2008 con fecha 13 de septiembre del 2008, esta Comisión solicitó a la autoridad responsable copia certificada de la averiguación previa penal [REDACTED] para verificar si desde la última diligencia practicada el 4 de octubre de 2007, consistente en la declaración testimonial de la menor afectada, existe nueva evidencia dentro de la integración de la investigación y mediante oficio SDH-545/2008, suscrito por la licenciada [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], la licenciada [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], remitió una tarjeta informativa en el que solamente señala que están pendientes algunas diligencias que se deben llevar a cabo con la menor, con lo cual se confirmó que, efectivamente, la averiguación sigue actualmente en el mismo estado, por lo que, mediante oficio PC-2369-2008 de fecha 25 de septiembre de 2008, se solicitó de nueva cuenta a la Procuraduría General de Justicia copia

certificada de la averiguación previa, concediéndole un plazo de tres días naturales sin obtener respuesta hasta la fecha, lo que hace suponer que son ciertos los hechos constitutivos de la queja, además de que ya están plenamente probados en autos.

En atención a que todas estas circunstancias quedaron evidenciadas en autos, no es lógico que después de un año, se pueda justificar clara violación a los derechos humanos de la quejosa y su menor hija.

Así las cosas, este Organismo considera que existió una evidente dilación en la procuración de justicia en lo que se refiere a la integración de la averiguación previa penal número [REDACTED], radicada en la Agencia Investigadora del Ministerio Público del Séptimo Grupo de Investigación de Delitos contra la Familia, Menores y Discapacitados, Mesa I, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la cual se inició con motivo de la denuncia presentada por la agraviada [REDACTED], en representación de su menor hija, [REDACTED], dilación que se produjo en virtud de que no se justifica legalmente el retraso con que fue integrada dicha indagatoria, lo que constituye faltas graves por parte de los Agentes Investigadores del Ministerio Público, que vulneran los principios fundamentales de legalidad y seguridad jurídica de las agraviadas, puesto que constituyen claras irregularidades que se tradujeron en una inaceptable dilación en la procuración de justicia.

Por lo tanto, con la facultad que confiere al suscrito Presidente la fracción V del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, se ordena hacer al Procurador General de Justicia del Estado, en su calidad de superior jerárquico de la autoridad señalada como responsable, las siguientes

RECOMENDACIONES:

PRIMERA.- Se instruya un procedimiento administrativo disciplinario, en contra de la Agente Investigadora del Ministerio Público del Séptimo Grupo de Investigación de Delitos contra la Familia, Menores y Discapacitados, Mesa I, de la ciudad de Saltillo, Coahuila, licenciada [REDACTED] y demás Agentes Investigadores que hayan intervenido en la violación a los derechos humanos de la menor

[REDACTED], representada por su madre, la señora **[REDACTED]**, al incurrir en dilación de la procuración de justicia y en una Irregular Integración de la Averiguación Previa Penal y se les impongan la sanción o sanciones que en derecho procedan.

SEGUNDA.- Se giren instrucciones al Agente Investigador del Ministerio Público que esté a cargo de la integración de la averiguación previa penal número **[REDACTED]** radicada en la Agencia Investigadora del Séptimo Grupo de Investigación de Delitos contra la Familia, Menores y Discapacitados, Mesa I, de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, a fin de que, en un tiempo razonable subsanen las irregularidades dentro de la indagatoria y, en su momento, resuelvan la situación de la misma, mediante el ejercicio de la acción penal, o en su defecto, dicten la determinación de no ejercicio de dicha acción.

TERCERA.- Se lleven a cabo cursos de capacitación, profesionalización, actualización y de ética profesional dirigidos a los Agentes del Ministerio Público para concientizarlos de las implicaciones que tienen las irregularidades que se cometen durante sus actuaciones y sobre el estricto respeto que deben guardar hacia a los derechos humanos de todas la personas con quienes tratan.

CUARTA.- En el caso de que la presente recomendación sea aceptada, solicítese al superior jerárquico de la autoridad responsable que, de conformidad con el artículo 130 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila y 102 de su Reglamento Interno, lo informe a esta Comisión dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación y hágasele saber de que, en caso negativo, o de que se omita su respuesta, se hará del conocimiento de la opinión pública.

QUINTA.- En el supuesto de que sea aceptada la Recomendación que se emite, deberán exhibirse las pruebas de su cumplimiento, las que habrán de remitirse a esta Comisión dentro de quince días siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar sobre la aceptación de la misma. En caso de estimar insuficiente el plazo, podrá exponerlo en forma razonada, estableciendo una propuesta de fecha límite para probar el cumplimiento de la Recomendación.

SEXTA.- Dese vista al Ministerio Público con los hechos a que se refiere este expediente para que, de estimarlo constitutivos de delito, integre la averiguación previa y ejercite la acción penal correspondiente.

Notifíquese personalmente esta resolución a la quejosa [REDACTED] madre de la menor afectada, [REDACTED], y, por medio de atento oficio a la autoridad responsable, para los efectos a que haya lugar.

Así, con fundamento en las disposiciones legales invocadas en esta determinación y en base a los razonamientos que en ella se contienen, lo resolvió y firma el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, licenciado **LUIS FERNANDO GARCÍA RODRÍGUEZ**.
Rúbrica. L. F. G. R.

Lo que hago saber a Usted para los efectos legales que en la resolución se contienen.

LIC. LUIS FERNANDO GARCÍA RODRÍGUEZ.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COAHUILA.